

Urge alargar la protección social a todo el planeta

Desde la educación universal hasta el derecho a la sanidad. En los países en vías de desarrollo no existen, como recuerda la ONU.

ELENA MAGARIÑOS

Parece evidente que una situación imprevista, como un accidente de coche o una enfermedad pueden tener distintas consecuencias dependiendo del país en el que resida la persona que lo sufre. No es igual enfermar en España, donde la Seguridad Social, además de cubrir los gastos sanitarios, asume el salario del enfermo durante el tiempo que está de baja; que hacerlo en cualquier país en vías de desarrollo en el que ninguna de estas medidas se contempla. Por este motivo, la tercera meta del primer Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS), establece la garantía de mecanismos de protección social.

Por ahora, tal como remarca Carlos Susías, presidente de EAPN España, hablar de medidas de protección social, en general, donde tiene más sentido es en la Unión Europea (UE), donde el sistema está asentado. «Es indispensable dentro del modelo social europeo y, de hecho, es una parte importante para que la UE aplique determinados tipos de políticas», explica. «La protección social comprende desde la educación universal hasta el derecho a la sanidad, y lo que permite es que ante un problema de salud no sea completamente imposible recuperarse de ello, y en el ámbito educativo, luchar contra la transmisión intergeneracional de la pobreza». Así se está mejorando la calidad de vida de las personas, pero en cada país funciona de una manera distinta. «Abarca muchos ámbitos y, dependiendo del Estado, están contempladas cosas como la protección de la maternidad, la discapacidad, la orfandad o la vejez, la dependencia o, simplemente, la jubilación», dice Susías.

SISTEMAS DÉBILES

Sin embargo, en los países en vías de desarrollo o no existen estos sistemas o son muy débiles. «No podemos olvidar que es una decisión política que tiene que ver con lo que se quiere hacer y con el modelo de desarrollo que se quiere llevar adelante», asevera, subrayando, además, que otra cuestión es la capacidad que tengan los gobiernos de esos países de tomar decisiones por sí mismos. «Si nos fijamos en España, es un



Tres de cada cuatro personas que padecen subalimentación crónica residen en el campo

país con una muy buena seguridad social, un sistema educativo bueno y muy seguro», apunta Pedro Cabrera, profesor de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas. «Sin embargo, hay personas que quedan fuera de esto, como las personas sin techo, que es un número elevado», añade. Al mencionar a otros países, sobre todo del África subsahariana y algunas partes de América latina, Cabrera sostiene que los sistemas de protección deben ir a asuntos de primera necesidad más básicos, como la protección alimentaria y sanitaria.

Susías señala que, en Europa, destaca la situación que permanece en muchos contextos después de la crisis económica. «Hay

parte de la población que continúa en esta situación, aunque los datos macroeconómicos nos dicen que hemos salido», apunta. Donde más se manifiesta esto es en la seguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales. Y es que, tal como señala la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tres de cada cuatro personas que padecen subalimentación crónica residen en el campo. Además, como advierte la FAO, muchas de ellas no están cubiertas por una protección social adecuada y dependen de los recursos naturales para sus medios de vida, lo que las hace especialmente vulnerables a múltiples riesgos.

1,7 MILLONES NO PUEDEN COMER

Por otra parte, un 3,6% de la población española (cerca de 1.700.000 personas) dice que no puede permitirse una comida diaria de carne, pollo o pescado, y esto es un problema grave que se afronta por estos sistemas de protección social y el programa de ayuda alimentaria a personas desfavorecidas de la UE (FEAD), comenta Susías. De hecho, los datos de este programa europeo revelan que las personas preceptoras de alimentos son, un 71% mujeres, y un 21% hombres. «Estos datos los ofrece Cruz Roja y Banco de Alimentos como distribuidores del FEAD, pero lo que sí sabemos es que la seguridad alimentaria de un país que es la cuarta economía de la UE no puede depender de estos fondos», subraya.

Por el contrario, para Susías, debería estar vinculada a un sistema de rentas mínimas que a la gente le permita una alimentación adecuada, y el FEAD vivir una reconversión hacia ayudas complementarias que tuvieran que ver con la mejora de la calidad de vida de las familias. «Si queremos evitar la pobreza tenemos que ver también la garantía de ingresos de las familias y eso tiene que ver con las rentas del empleo, que tienen que ser decentes y con ingresos suficientes, sin abusar de las becas ni de los falsos autónomos», sostiene Susías, que también destaca la necesidad de crear un sistema de pensiones que garantice un nivel de vida adecuado. «Por ejemplo, las no contributivas, que ahora mismo afectan mucho más a mujeres que a hombres, y con mayor impacto en el ámbito rural, si están por debajo del umbral de la pobreza, tendremos personas mayores pobres y desprotegidas», explica. En este sentido, para los expertos, el sector privado tiene un papel importante. En primer lugar, como apunta Susías, incentivando el sistema de protección social y como parte del mismo, comprometiéndose con el incentivo del trabajo decente.

«El sector privado, y en especial las empresas pertenecientes al sector de la agroalimentación, tiene un papel fundamental en el fomento de la seguridad alimentaria», subrayan desde la Red Española de Pacto Mundial. «Entre las acciones que pueden realizar estas organizaciones se encuentran, la inversión en el desarrollo de soluciones innovadoras, por ejemplo, a través de la acuicultura, para abordar la seguridad alimentaria sostenible para una población mundial en crecimiento», explica estas fuentes.

CLAVES

- Los gobiernos tienen que hacerse responsables de ofrecer a los ciudadanos una protección básica.
- Es indispensable dentro del modelo social europeo, pero no es así en otros países.
- La FAO advierte de que los habitantes de las zonas rurales son los más vulnerables. Los sistemas de protección deberían ser asuntos de primera necesidad.